

Que no te engañen

LA
JUVENTUD
NO ES
FACHA





El plan de paz de Trump reconoce su derrota en Ucrania

Un reparto del botín entre bandidos imperialistas



Izquierda
Revolucionaria
Comisión Ejecutiva

Tras la entrevista entre Trump y Putin en Alaska en agosto y varios meses de negociaciones, la firma de un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra en Ucrania puede estar cerca. El 20 de noviembre los medios de comunicación se hicieron eco del plan de 28 puntos propuesto por Trump que recoge, casi en su totalidad, las reclamaciones del Kremlin.

En los siguientes días se desarrollaron en Ginebra conversaciones entre EEUU, la UE y Ucrania con resultados muy amargos para los belicistas europeos, que tendrán que transigir con lo que desde el inicio del conflicto proclamaban que jamás aceptarían. Y en próximas fechas se celebrará una nueva cumbre entre EEUU y Rusia, las dos potencias con capacidad de decidir cuándo y cómo finalizará esta guerra.

Una indiscutible victoria rusa

No es descartable que alguno de los puntos del plan de Trump pueda ser ligeramente modificado para dulcificar la humillante píldora que los gobernantes de la UE y el Gobierno ucraniano tendrán que tragar, pero todo indica que no hay marcha atrás en lo esencial: la aceptación de la victoria de Putin y su régimen.

Ni en el campo de batalla ni en la guerra económica contra Rusia, ejecutada a través de sanciones comerciales, financieras y de la incautación de grandes reservas económicas en el exterior, han podido las potencias occidentales doblegar la maquinaria militar del imperialismo ruso

ni el apoyo económico y financiero que ha prestado China al régimen de Putin.

La propuesta de Trump reconoce este hecho y asume las principales reclamaciones de Putin: reducción de las futuras fuerzas armadas de Ucrania a 600.000 efectivos, cláusula en la Constitución impiendo el ingreso en la OTAN e inclusión en los estatutos de la OTAN de una disposición que impida la futura adhesión de Ucrania, renuncia a estacionar tropas de países de la OTAN en suelo ucraniano, reanudación del funcionamiento de la central nuclear de Zaporiyia con reparto a partes iguales entre Rusia y Ucrania de la electricidad producida y, como culminación de la derrota, reconocimiento como territorio ruso de Crimea, Lugansk y Donetsk, incluidos los territorios todavía controlados por el ejército ucraniano, y congelación del frente en Jersón y Zaporiyia, lo que equivaldrá a un reconocimiento *de facto* de la soberanía rusa en esos territorios.

Trump aprovecha la derrota para salir lo mejor parado en el reparto del botín

Desde el inicio de su mandato, Trump dejó claro que esta guerra estaba perdida y que el dinero gastado por Biden en apoyar a Zelenski era un despilfarro.

Pese a las críticas de Trump, el respaldo de Biden estuvo muy lejos de ser desinteresado. La Unión Europea lo pagó con creces al verse obligada a sustituir el gas ruso por gas norteamericano cuatro veces más caro y pagar a precio de oro a las empresas de defensa norteamericanas una gran parte de los suministros militares entregados a Ucrania.

La consecuencia de estas cargas económicas, asumidas dócilmente por los gobernantes de la UE y por una clase dominante europea que desde hace muchos años ha subordinado su suerte a la oligarquía financiera yanqui, ha sido una grave recesión en Alemania y el empobrecimiento generalizado de la clase trabajadora del viejo continente.

Pero estos sacrificios europeos todavía son poco para Trump. La burguesía norteamericana es consciente de que no solo ha perdido una batalla fundamental, sino de que su posición ante los futuros choques con el capitalismo chino se ha debilitado.

Por eso el plan intenta mitigar la derrota re estableciendo las relaciones económicas con Rusia. En consecuencia, contempla la reintegración de Rusia a la economía global y al G-8. Las sanciones serían levantadas y Rusia y EEUU firmarían un acuerdo de cooperación económica a largo plazo para un desarrollo mutuo en energía, recursos naturales, infraestructura, IA, centros de datos o proyectos de minería en el Ártico, y para garantizar la explotación estadounidense de los recursos mineros de Ucrania en la postguerra inmediata.

El futuro de los fondos congelados a Rusia también está incluido, con ventas escandalosas para EEUU y un castigo adicional a la UE, que tendría que aportar 100.000 millones de dólares a fondo perdido para la reconstrucción de Ucrania. A esto se añadiría una cantidad casi similar (86.000 millones) detraída de los activos rusos congelados, que sería administrada por EEUU que recibiría, con la bendición de Moscú, el 50% de los beneficios.

¿Hacia un nuevo reparto del mundo?

Este giro drástico de Trump va más allá de Ucrania. La completa subordinación de la UE a los objetivos estratégicos de Washington ha quedado sólidamente establecida. Pero esta "victoria" de Trump ante una Europa en decadencia dista mucho de compensar la pérdida de influencia mundial de EEUU ante el ascenso de China, que se apoya en su enorme potencia industrial y tecnológica y en su capacidad para regar el mundo, especialmente al Sur Global, con cuantiosas inversiones.

El mundo dominado por EEUU como única potencia hegemónica, con el que soñaban tras el colapso de la URSS, está agrietándose antes de haberse consolidado. La guerra comercial directa contra China ha vuelto a estrellarse contra la decadencia industrial de EEUU.

El régimen de capitalismo de Estado chino—impulsado por los recursos energéticos y materias primas de Rusia, por cuantiosos flujos de capital de todo el mundo que buscan beneficios seguros y por amplios acuerdos comerciales con las principales economías capitalistas emergentes— reclama el lugar que le corresponde como director efectivo de una parte sustanciosa de la globalización.

El imperialismo norteamericano ya ha demostrado que no va a renunciar fácilmente a su hegemonía histórica. Su agresividad contra Venezuela, su apoyo al genocidio sionista y su plan para convertirse en potencia neocolonial de una Gaza arrasada y de un nuevo Oriente Medio golpeado por sus armas y las de sus aliados israelíes demuestran que la batalla no va a concluir. El estado de guerra imperialista ha llegado para quedarse.

Pero eso no quiere decir que acuerdos temporales entre los dos bloques imperialistas por el reparto de áreas de influencia y el botín económico estén descartadas. El mito de un Putin o un Xi Jinping antiimperialistas hace mucho tiempo que se vino abajo.

Y si quedaba alguna duda, la posición de China y Rusia en la votación del plan de Trump para Gaza en el Consejo de Seguridad de la ONU lo ha despejado definitivamente. Con sus abstención, han dado vía libre a Trump y Netanyahu para culminar el genocidio del pueblo palestino, al tiempo que ambas potencias se aseguran, también aquí, su parte del sangriento botín. "Gaza para ti y Ucrania para mí", es el crudo resumen de lo que está sucediendo ante nuestros ojos.

Es cierto que China y Rusia desafian al imperialismo yanqui, pero no para destruirlo, sino para redistribuir las parcelas de poder y riqueza que, según su criterio, deberían corresponder a sus cada día más potentes burguesías.

La clase trabajadora y los oprimidos del mundo no podemos esperar nada de ningún régimen capitalista, por mucho que recubra sus intereses con un barniz de retórica antiimperialista. Solo nuestra organización en torno a un programa de clase, comunista e internacionalista abrirá el camino a un futuro donde horrores como los de Gaza, Ucrania, Sudán u otros muchos lugares desaparezcan para siempre.

Que no te engañen

LA JUVENTUD NO ES FACHA



Juan Díaz
Izquierda Revolucionaria
Comisión Ejecutiva

La campaña es descarada. Las palancas mediáticas de la derecha y muy especialmente las de esa prensa que pretende embaucarnos autoproclamándose progresista, véase *El País*, pero que responde mejor que nadie a la voz de su amo, el capital, se han movilizado para convencernos de que “la juventud se ha vuelto facha, y no hay nada que hacer”.

Encuestas cocinadas para soportar la consigna, reportajes con expertos y mucha, mucha propaganda. Y esto, cuando millones y, en concreto, cientos de miles de jóvenes antifascistas hemos tomado las calles denunciando el genocidio sionista y contra la extrema derecha global, dando una respuesta ejemplar. Pero... que la realidad no estropee un “buen” titular.

El show fascista de Vito Quiles, un fiasco

Nada es casualidad. Se trata de sembrar escepticismo y trasladar la idea de que estamos aislados. Una operación de altura que está también detrás de la bufoñesca campaña del fascista Vito Quiles para entrar en las universidades públicas y machacar con que la ultraderecha es hegemónica.

La imagen de esta marioneta, financiada por “empresarios que apoyan esta causa” porque “simpatizan con lo que hago”, subida a lomos de sus guardaespaldas y hablando por un megáfono de juguete es muy representativa de cómo les ha salido el plan. “Vito, pringado, ni una charla has dado”, ni con seguridad privada ni con la impunidad y colaboración de la UIP. En Barcelona, Alacant, València, Iruña, Sevilla, Málaga, Madrid... un muro de jóvenes antifascistas ha impedido que la reacción y sus discursos de odio entren.

Se trata de una jugada política para desmoralizarnos y amedrentarnos que pone el foco en la juventud y en la universidad pública, pre-

cisamente cuando sufre una infrafinanciación que la degrada, cuando es objetivo de un plan para privatizarla y, como en Madrid, cuando se pretende cercenar el derecho a la protesta, al más puro estilo trumpista. La respuesta: una impresionante huelga general de 48 horas en noviembre en la universidad pública madrileña que ha paralizado todo y ha sacado a decenas de miles a las calles, nuevamente con la juventud combativa a la cabeza. Así es como conquistamos derechos y cerramos el paso a la extrema derecha.

No pretendemos minusvalorar el peligro ultraderechista. Las imágenes de este verano en Torre-Pacheco organizando auténticas cacerías contra la población inmigrante en unidad de acción con la policía, de las bandas de matones tipo Desokupa actuando sin cortapisas en barrios obreros, el incremento de la represión policial contra quienes luchamos mientras protegen a los fascistas... son una advertencia de que el avance de la reacción es muy serio.

Polarización social

Obviamente hay jóvenes de derechas, y ahora se sienten fuertes y protegidos. Pero se enfrentan a una mayoría mucho más amplia. Lo que hay es un proceso de polarización en la sociedad, tanto a derecha como a izquierda, que afecta también a la juventud y que hunde sus raíces en la descomposición del sistema capitalista.

Ante este escenario, la democracia parlamentaria capitalista se muestra incapaz de satisfacer las necesidades básicas de la inmensa mayoría, más aún las de la juventud. Es esperable el desarrollo de un sentimiento de desafección. Para millones, el balance del Gobierno de coalición liderado por el PSOE, tanto en la etapa de Podemos como en la de Sumar, se resume en una frase: “más de lo mismo”. Esta es la experiencia de una gran parte de jóvenes cuya experiencia política ha sido siempre bajo este Gobierno.

Las consecuencias de las políticas capitalistas que defiende la izquierda institucional han sentado la base para dar credibilidad a la demagogia de la extrema derecha.

Estos machitos resentidos que se vieron amenazados ante el avance de la lucha feminista, estos hijos de pequeños explotadores que sienten que la fortuna familiar está en riesgo, los niños de papá, frustrados y encolerizados han encontrado una bandera por la que luchar. La bandera del *sálvese quien pueda*, de aplastar al más vulnerable, del embrutecimiento y del atraso moral, la cruz y los toros. El “cuñadismo” de barra de bar se expresa también en *X y Tik Tok*, y es esto lo que magnifican de forma consciente Prisa, Mediaset y la derecha en tromba.

“Los jóvenes son más de derechas que nunca” titulaba *El País* del 2 de noviembre un sesudo reportaje sobre un supuesto retroceso masivo en la conciencia. ¿Por qué no publican qué porcentaje de la juventud se declara antifascista o anticapitalista? ¿Por qué no preguntan si ven en Vox una amenaza? ¿Por qué no mencionan las movilizaciones contra la extrema derecha, en defensa de los servicios públicos, en solidaridad con el pueblo palestino, por los derechos de la mujer trabajadora... ni osan entrevistar a sus protagonistas? Los resultados no valdrían para sustentar la propaganda de la prensa “seria”.

¡La juventud es la llama de la revolución!

La lucha en solidaridad con el pueblo palestino es un movimiento con un ADN antifascista incuestionable. La caballería pesada ha sido la juventud estudiantil, con dos huelgas generales convocadas por el Sindicato de Estudiantes. También los jóvenes han plantado cara a las provocaciones y agresiones de grupos fascistas como en Vallecas con el asalto al gimnasio La Fábrika o en Gasteiz con el acto de Falange que acabó en cargas salvajes de la Ertzaintza contra los antifascistas.

Cientos de miles de estudiantes volvieron a las calles en una huelga convocada por el SE el 28 de octubre con-

tra los discursos de odio y la violencia en las aulas, identificando el *bullying* con el racismo, la gordofobia, el machismo, la homofobia y la transfobia; en resumen, señalando a la extrema derecha.

Ni que decir del carácter de las movilizaciones contra el PP en Andalucía o Valencia. Carlos Mazón no ha tenido otro remedio que dimitir por la enorme presión de una lucha desde abajo que tras la tragedia de la DANA no ha cesado. No está de más recordar que frente al abandono de las instituciones del Estado, la juventud jugó un papel de primer orden a la hora de organizar un ejército de voluntarios para poder salir adelante. Y Moreno Bonilla se enfrenta a un movimiento feminista que lucha por una sanidad 100% pública y por la justicia para las víctimas de la gestión criminal del cribado en el cáncer de mama.

Sobredimensionar la fuerza social de la extrema derecha es una decisión consciente que busca desmoralizarnos o eludir responsabilidades. La izquierda reformista sabe mucho de esto, ha centrado su estrategia en la vía institucional, en gobernar sin confrontar con los poderosos, abandonando la organización y la lucha. La experiencia de los últimos años es cristalina: sembrar decepción y la idea del *no se puede*. Tachar a millones de bajo nivel de conciencia y justificarse en un giro a la derecha es una excusa para seguir apostando por gestionar migajas y garantizar la paz social.

Evitar que la extrema derecha pueda ocupar nuevos espacios es la tarea. Se trata de golpear su moral y reforzar nuestra confianza. Contraponer a la salida individual, al odio a los más débiles y al *sálvese quien pueda* un plan de lucha que ponga encima de la mesa una salida colectiva a la crisis capitalista, y eso solo puede hacerse organizándonos y levantando un programa revolucionario consecuente que permita poner todos los re-

cursos y la riqueza existente a disposición de satisfacer las necesidades de la mayoría social, y que desenmascare en los hechos la demagogia reaccionaria. Manos a la obra.





Antonio García Sinde
Izquierda Revolucionaria
Comisión Ejecutiva

En noviembre se cumplían 50 años de la muerte de Franco y la campaña para intentar distorsionar lo que fue su dictadura y el abrumador nivel de sufrimiento y horror que trajo consigo arrecia.

Desde medios de la derecha más extrema se reivindica la época franquista, como han hecho varios alcaldes y concejales de Vox, incluso reclamando la construcción de un monumento a Franco en Badajoz, el escenario de una de las más salvajes matanzas de los fascistas en la guerra civil.

Desde el PP no se atreven (por el momento) a tanto, pero no cesan en su empeño de blanquear esos años alegando los supuestos avances económicos y sociales que habría impulsado durante su sangrienta dictadura.

Los Pactos de la Transición favorecen el blanqueo del franquismo

Desde la izquierda gubernamental condenan enérgicamente la dictadura, pero sobre ese rechazo pesa una fuerte hipoteca. Como indica el lema de la campaña con que el Gobierno decidió conmemorar este aniversario —“España en libertad. 50 años”—, la condena parece extenderse solo hasta el 20 de noviembre de 1975.

A partir de esa fecha empieza un periodo cuya memoria es terreno resbaladizo para la izquierda que pactó la Transición con los herederos de Franco. Sin embargo, los primeros meses de la monarquía de Juan Carlos representaron la perfecta continuidad de la dictadura, e incluso la intensificación de la represión.

La denuncia de los crímenes del franquismo no puede ser completa si no se

está dispuesto a aceptar que la muerte del dictador no representó el final de la dictadura. Los Pactos de la Transición —gracias a las renuncias de los dirigentes del PSOE y el PCE— permitieron a la burguesía española, y a sus mentores de Washington, superar la profunda crisis en que estaba sumido su sistema de dominación desde finales de los años sesenta, blindaron los crímenes franquistas y liberaron a sus responsables de ser puestos ante la justicia.

Ese pacto de silencio se materializó en la Ley de Amnistía de 1977, que borró de un plumazo la responsabilidad por cientos de miles de asesinatos, violaciones, torturas y encarcelamientos. Esa impunidad preparó el terreno para que hoy la extrema derecha reivindique el histórico criminal del franquismo.

Las concesiones de la izquierda no se limitaron a extender una ley de punto y final sobre la represión y sus responsables. El núcleo de estos acuerdos fue aceptar la continuidad, sin el más mínimo atisbo de depuración, del aparato del Estado franquista. Policías, militares, jueces, fiscales y altos funcionarios, protagonistas directos de la represión y de la corrupción en la que chapoteaban las altas esferas del régimen, recibieron un inmaculado carné de “demócrata de toda la vida”.

No es extraño que el principal beneficiario de estos pactos, Juan Carlos de Borbón, aproveche sus memorias para reivindicar no solo su trayectoria personal, sino para sumarse a la campaña de elogio y blanqueo del dictador.

Según el exrey, deberíamos estarle agradecidos porque fue él quien “nos dio la libertad”. Pero Juan Carlos empezó su reinado dándonos represión y muerte. Su principal ocupación fue, siguiendo el ejemplo de Franco, engordar su inmenso patrimonio personal con todo tipo de prácticas corruptas.

Quienes vivimos sus primeros meses en el trono podemos dar testimonio de que su primer Gobierno, dirigido por Carlos Arias Nava-

50 años de muerte de la memoria de la dictadura

rro, el feroz fiscal encargado tras el final de la guerra civil de la represión en Andalucía, y Manuel Fraga Iribarne, posteriormente fundador del Partido Popular, hizo todo lo posible por mantener sin cambios el régimen. Y se hizo regando con sangre de los trabajadores y la juventud las calles de todo el Estado.

Fue la movilización de la clase obrera lo que impidió la continuidad del franquismo

Pese a la brutalidad de sus últimos años, que culminó con los cinco fusilamientos de septiembre de 1975, la capacidad represiva del régimen estaba enormemente erosionada, y los intentos de prorrogar el franquismo se estrellaron contra una dura realidad.

No obstante, ahora que el revisionismo histórico se combina con un relato falso de la Transición, es importante recordar por qué el capitalismo español impuso un régimen de terror.

El objetivo del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 fue ahogar en sangre la revolución de los obreros y campesinos. Los militares fueron la herramienta para asegurar el dominio de los banqueros, terratenientes y empresarios que financiaron el golpe y que fueron los grandes beneficiarios de la dictadura.

Además de los 200.000 muertos en la guerra y de los 500.000 exiliados, los datos de la represión tras la declaración oficial de la “paz” son escalofriantes. Según Charles Foltz, corresponsal de *Associated Press* en Madrid en los años 40, los datos oficiales del Ministerio de Justicia indicaban que entre el 1 de abril de 1939 y el 30 de junio de 1944 los ejecutados o muertos en prisión fueron 192.684, sin incluir las decenas de miles de “pasados”, personas asesinadas por bandas de falangistas o requetés y enterradas en las miles de fosas comunes repartidas por todo el país.

Tras acabar la Segunda Guerra Mundial, y una vez garantizada por Estados Unidos y las potencias occidentales vencedoras la continuidad de la dictadura, el régimen lanzó una segunda oleada represiva para liquidar los restos de las organizaciones obreras que hubieran podido sobrevivir a la guerra y a los años posteriores de persecución.

Sin embargo, no lograron aplastar completamente a la clase obrera. En los años 40 se produjeron las primeras huelgas, que se extendieron y se multiplicaron en la década siguiente. Pero fue a raíz de la gran huelga minera asturiana de 1962 cuando la lucha obrera desbordó a la dictadura.

A pesar de que huelgas y protestas laborales eran delito, las durísimas condiciones de vida empujaban a la lucha. Como la conflictividad arreciaba, la dictadura aprobó un sistema de elecciones sindicales, dentro del sindicato vertical, que abrió un margen de actuación a los militantes de la izquierda y sobre todo al partido más fuerte y mejor organizado en la clandestinidad, el PCE.

Incluso el régimen tuvo que reconocer, aunque con limitaciones, el derecho a la negociación colectiva.

La clase obrera fue conquistando espacios de acción en fábricas y empresas. A pesar de no ser un organismo legal, las Comisiones Obreras operaron a la luz del día hasta que en 1967 el régimen decidió que se había llegado demasiado lejos e inició un nuevo giro represivo ilegalizándolas y encarcelando a sus dirigentes, entre ellos a Marcelino Camacho.

Desde entonces el franquismo entra en una fase de abierta crisis. La dialéctica entre unas luchas obreras, estudiantiles y populares cada vez más potentes y una represión cada vez más feroz no solo



Después de la muerte de Franco y los crímenes, la memoria sigue viva

marca los últimos años de Franco, también el primer Gobierno de la monarquía.

Solo tras la huelga general de Vitoria de marzo de 1976, y la matanza de cinco trabajadores, y la oleada de protestas que le siguió, el régimen, espoleado por el miedo a un estallido revolucionario, se vio forzado a buscar una salida a través de la negociación que salvaguardara los intereses de la clase dominante. La fantasía de que Franco preparó el terreno a la democracia nombrando sucesor a Juan Carlos no resiste la prueba de los hechos.

El mito de las "políticas sociales" de la dictadura

Aprovechando que la crisis de la vivienda está generando un enorme malestar social, desde medios de la derecha se reivindica la construcción masiva de viviendas baratas como una demostración del "compromiso social" de Franco.

Es cierto que se construyeron cientos de miles de viviendas, habitualmente de ínfima calidad, para alojar a los trabajadores que la naciente industria reclamaba masivamente. También lo es que en la última época del franquismo los alquileres se congelaron. Pero no era una muestra de sensibilidad social.

Al finalizar la guerra civil la política de vivienda quedó clara: derogación de la protección legal a los inquilinos esta-

blecida por la República, libertad a los propietarios para fijar los alquileres y vivienda pública solo como recompensa a los combatientes de su bando. Como resultado de esto y de la migración masiva del campo a las ciudades cientos de miles en la periferia de las grandes ciudades vivían en chabolas, cuevas e infraviviendas.

El hacinamiento alcanzó niveles nunca vistos y estos problemas, sumados a los bajos salarios, crearon un ambiente de protesta que se trasladaba a las empresas y creaba las condiciones para la expansión de las organizaciones clandestinas de la izquierda. Los propietarios de las nuevas fábricas, que surgían como setas tras el Plan de Estabilización de 1959, reclamaban facilidades de alojamiento para la mano de obra que necesitaban. Ambos factores obligaron al régimen a promover la construcción de viviendas obreras que hizo multimillonarios a constructores y promotores simpatizantes del fascismo, como José Banús.

La subida desmesurada de alquileres puso contra las cuerdas a los sectores de la clase trabajadora que aspiraban a una vivienda digna y creó una presión sobre los salarios y los costes empresariales. La solución de Franco fue congelar los alquileres, sacrificando los intereses de la pequeña burguesía rentista frente a los más altos intereses de la gran burguesía financiera e industrial.

Todas las políticas sociales que se atribuyen a la buena voluntad de Franco se consiguieron muy a su pesar, fruto de la presión directa de las luchas vecinales, o como concesiones preventivas para evitar su extensión y el fortalecimiento de la oposición.

La Transición sangrienta

Ante la evidencia de que los asesinatos a manos de policías y bandas fascistas o la tortura continuaron tras la muerte del dictador, se suele recurrir al argumento de que eran hechos residuales perpetrados por "nostálgicos del franquismo" o por "el búnker", un sector de veteranos falangistas que había perdido ya su antiguo poder.

La realidad dice lo contrario. Lejos de la leyenda de una Transición pacífica ejemplar, esta fue extremadamente sangrienta y la violencia fue orquestada y financiada desde el corazón mismo del aparato del Estado.

La caída del Gobierno Arias-Fraga en julio de 1976, por la lucha obrera y popular, fue el reconocimiento de la burguesía española y de sus padrinos en los centros del poder financiero mundial de que la continuidad del régimen era inviable. Se vieron obligados a ceder, pero cada pulgada que la lucha obrera arrancaba nos la hicieron pagar a un alto precio en sangre y represión.

El Tribunal de Orden Público, creado por Franco para revestir la brutal represión de aparente "legalidad", siguió operando hasta que, en enero de 1977, se transformó en Audiencia Nacional, aunque con los mismos jueces y personal que amparó durante años torturas y los crímenes de la policía franquista.

Los miembros de la Brigada Político-Social (BPS), ejecutores de horribles torturas y de numerosas muertes en las comisarías, fueron recompensados con ascensos y puestos de responsabilidad en la nueva policía "democrática". La BPS se rebautizó en 1978 como Brigada Central de Información, pero hasta 1986 no se formalizó su desaparición.

En los siete años transcurridos entre la muerte de Franco y la victoria electoral del PSOE en 1982 alrededor de 318 trabajadores y jóvenes fueron asesinados a manos de la policía y de la extrema derecha.

A medida que la movilización avanzaba con más fuerza, amenazando con barrer no solo a los herederos del régimen franquista, sino también al sistema capitalista que lo había engendrado, la violencia del Estado se recrudecía.

Numerosas huelgas acababan con la intervención a tiros de la policía, como la de Gasteiz en marzo de 1976, en la que fueron asesinados 5 trabajadores y muchos más heridos de bala o brutalmente apaleados. La policía se ensañó contra las movilizaciones estudiantiles, ayudados por bandas de extrema derecha organizadas, protegidas y financiadas por las autoridades. Las calles de Madrid se llenaron de sangre en los últimos meses de 1976 y principios de 1977. Ángel Almazán, Arturo Ruiz, Mari Luz Nájera, los abogados laboralistas de Atocha, Vicente Cuervo y muchos más pagaron con sus vidas su compromiso con la causa de la libertad y la emancipación de la clase obrera. Hasta 1980 se extendió la impunidad criminal de la policía y los fascistas, que se cobraron a tiros la vida de los estudiantes José Luis Montaños, Emilio Martínez y Yolanda González.

También las calles de Euskal Herria se colmaron de muerte durante muchos años después de que acabase la Transición. Las acciones de los GAL, las torturas y asesinatos en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo dan testimonio de que el aparato represivo de la dictadura y sus métodos siguieron activos, esta vez con la protección del régimen del 78 y los Gobiernos de Felipe González.

A pesar de las declaraciones del Gobierno y de las palabras vacías de Pedro Sánchez condenando el franquismo, a pesar de las leyes de Memoria Democrática y los actos oficiales, la demanda de verdad, justicia y reparación reiteradamente formulada por las víctimas de la violencia policial y fascista sigue sin ser atendida.

Hoy, como en los años 30, estamos en una batalla mundial contra el avance de la extrema derecha y el fascismo. Desenmascarar sus mentiras y exponer la verdadera naturaleza de la dictadura franquista tienen que ser una parte fundamental de esa lucha, y la recuperación de la memoria de nuestra clase es una valiosa herramienta.



El aparato estatal franquista vivo y a la ofensiva

VIENE DE LA CONTRAPORTADA

La farsa de la justicia burguesa y la ofensiva de la reacción

Tras esta sentencia del TS, el primer condenado por el fraude fiscal de González Amador, 350.000 euros fruto de sus trapiéchos en la gestión de contratos por mascarillas mientras morían cerca de 8.000 mayores en la Comunidad de Madrid, ha sido el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El juicio ha sido un auténtico paripé donde todo estaba ya “atado y bien atado”, sin importar pruebas ni testimonios. Los periodistas que dieron la noticia sobre un posible acuerdo entre la Fiscalía y González Amador para evitar el procesamiento, y que declararon que la conocieron antes que la Fiscalía, han sido convidados de piedra. A ver si decir la verdad va a tener importancia en un juicio del Supremo.

Pero es que además la acusación se ha basado en la nota de prensa que la Fiscalía publicó para responder el bulo de Miguel Ángel Rodríguez, el cerebro detrás de Ayuso, de que la Fiscalía había ofrecido el acuerdo, y no al revés, y que el propio Rodríguez ha reconocido en sede judicial que era mentira.

La pantomima del juicio era una pantalla necesaria para dar apariencia legal a una decisión política tomada de antemano y en otras instancias. Hay que acabar con este Gobierno, y los soldados con toga son una tropa fanática y disciplinada.

Entre los magistrados que han dictado este fallo está Manuel Marchena, del que el PP dijo en un chat de senadores, tras una acuerdo con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que les permitiría controlar “la sala segunda desde atrás”, refiriéndose a la Sala Penal del TS que trata los grandes casos de corrupción y penales.

Marchena fue el responsable de la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) impiéndiendo que curriera a las elecciones la

Izquierda Abertzale. Condenó a Atutxa, presidenta del Parlamento Vasco, por permitir tramitar el Plan Ibarretxe, y archivó las causas contra Fernández Díaz por los casos de espionaje a los dirigentes independentistas al tiempo que presidía el juicio del procés.

Otro de los magistrados es Antonio del Moral, miembro activo del Opus Dei. Este personaje impartió en el colegio mayor Albayzín la conferencia “Referencias jurídicas en la vida y enseñanzas del beato José María [Escrivá de Balaguer]”, y absolvio a la alcaldesa de Jerez del PP por concesión de contratos a miembros de la trama Gürtel “ya que no sabía lo que firmaba”.

También forman parte de este plantel Juan Ramón Berdugo, que confirmó la absolución de Camps por el caso de los trajes y condenó a un año de cárcel al cantante César Strawberry por unos tuits; y Carmen Lamela, que inició desde la Audiencia Nacional el proceso contra los Jordis por el procés y fue instructora del caso Altsasu, condenando con hasta diez años de cárcel a unos jóvenes vascos por una pelea de bar alegando que se trataba de terrorismo.

Por último, el presidente del Tribunal, Andrés Martínez Arrieta, absolió a cuatro guardias civiles de la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa por torturas a dos miembros de ETA, siendo posteriormente condenado el Estado español por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al reconocerse dichas torturas. Además fue el ponente de la sentencia que inhabilitó a Otegi hasta 2021.

Depurar el aparato del Estado. Derogar la Ley Mordaza. ¡Basta de palabrería!

El actual aparato judicial, como el policial o el ejército, ha sido heredado intacto de la dictadura franquista. Cómo puede ser que 50 años después de la muerte del dictador, y tras 29 de Gobiernos del PSOE, aún estemos así. La respuesta es sencilla. Tanto el PSOE como la izquierda parlamentaria se han negado a cualquier tipo de depuración del aparato del Estado, permitiendo que los mecanismos principales de dicho aparato represivo estén plagados de derechistas y ultraderechistas, o de fanáticos religiosos del Opus Dei o de cualquier otra secta ultracatólica.

El propio Gobierno hace tan solo un año renovaba en un acuerdo con el PP el CGPJ, bloqueado durante cinco años por la derecha, y lo presentaba como un primer paso para recuperar el consenso. Ahora se ven los magníficos resultados.

Se quejan de esta condena, pero ahí sigue el ministro Marlaska lanzando contra activistas, huelguistas y movimientos sociales a la policía, y aceptando montajes judiciales contra sindicalistas, jóvenes antifascistas y activistas que luchan contra los desahucios. Un ministro que protege a fascistas con placa, que no dice nada de sus compadres con fascistas en Torre-Pacheco, con provocadores como Vito Quiles y cuyos “sindicatos” llegan a acuerdos de “formación” con bandas neonazis como Desokupa.

El Gobierno de Pedro Sánchez aplica la Ley Mordaza, negándose a dero-

garla tal y como prometieron tanto el PSOE como sus socios de Podemos antes, o ahora de Sumar e IU. Necesitamos hechos que golpeen a la reacción y que frenen la peligrosísima deriva autoritaria hacia la que ya nos encaminamos.

Ahora se echan las manos a la cabeza, pero muestran completa impotencia para enfrentar a estos reaccionarios con toga. Su alternativa: acudir al Tribunal Constitucional y nombrar un nuevo fiscal general “solvente”. Pero mientras el aparato del Estado continuará su batalla, preparando el terreno para que tarde o temprano lleguen a La Moncloa el PP de la mano de Vox, ¡o al revés!

Lo que vemos forma parte de un proceso global. El trumpismo también se está basando en las mismas fuerzas, contando con el TS o con los cuerpos policiales y militares, plagados de reaccionarios deseosos de instaurar una dictadura fascista. Es lo mismo que ocurrió con Hitler, cuando miles de policías, jueces y funcionarios pasaron de servir a la “democrática” República de Weimar a servir al Tercer Reich.

La única posibilidad de enfrentarlos es mediante la movilización de masas. Si la izquierda parlamentaria cree que estamos ante una decisión gravísima sin precedentes y ante un golpe de Estado blando, la única alternativa es llamar a ocupar las calles, levantando una campaña de resistencia que exija la completa depuración del aparato del Estado, la inmediata derogación de la Ley Mordaza y la liberación de las decenas de presos políticos que cumplen condenas hoy en las cárceles del Estado español.

Pero esto pondría en el punto de mira los fundamentos del capitalismo español, como lo hizo la movilización de la clase obrera y la juventud durante los años de la Transición, que la izquierda institucional terminó canalizando en favor del aparato franquista.

Es hora de aprender del pasado y entender que este aparato del Estado seguirá sirviendo a sus amos, los grandes monopolios capitalistas. Si queremos un cambio, si queremos derrotar a la ultraderecha y a la reacción, hay que levantar la bandera de la revolución.





¿Qué puede aportar el estudio del fascismo de los años veinte y treinta del siglo XX para entender lo que está sucediendo? ¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias? ¿Cómo podemos caracterizar a la Administración Trump? ¿Qué

consecuencias tiene la pugna por la supremacía entre EEUU y China en estos desarrollos?

Para responder a estas cuestiones y a otras, como la erosión del parlamentarismo y el papel de la socialdemocracia en

Nuevo número ya a la venta

los países del capitalismo central, y los ejes actualizados de la política comunista contra el fascismo, publicamos el trabajo de Juan Ignacio Ramos, *La lucha contra la extrema derecha y el frente único*.

Siguiendo en el mismo plano, el genocidio en Gaza no ha terminado. A pesar de que organismos como la ONU y la inmensa mayoría de los Gobiernos capitalistas han respaldado el plan de Trump y Netanyahu, es más que evidente que el Gran Israel, la limpieza étnica y el aniquilamiento del pueblo palestino siguen en el horizonte político del sionismo y sus aliados de Washington.

Para recapitular sobre lo sucedido y analizar las perspectivas, Miguel Campos escribe *La farsa de la paz. El genocidio sionista continúa en Gaza y Cisjordania*.

Finalizamos esta nueva edición con la publicación de un trabajo del veterano militante comunista y luchador antifranquista Antonio García Sinde: *50 años después de la muerte de Franco, la memoria de los crímenes de la dictadura sigue viva*. Más que un artículo es un anti-

doto para no enfermar con la campaña de intoxicación en los medios gubernamentales, esa que nos cuenta que la Transición fue modelica, la monarquía es fantástica y la democracia que vivimos una perla cultivada.

Con datos precisos y cifras incontestables, deja claro que la conquista de las libertades y los derechos democráticos se logró con cada movilización obrera y estudiantil, con cada huelga, salto y reparto de panfletos, con cada asamblea y acción del movimiento vecinal. Luego, las maniobras traicioneras de la izquierda reformista y sus pactos con los políticos del franquismo nos sirvieron el plato envenenado del régimen del 78, la impunidad que blinda a los responsables de tantas muertes y represión, y una monarquía podrida y corrupta hasta la médula.

Este *Marxismo Hoy* no celebra esta impostura reaccionaria, pero sí dedicada sus páginas a esa generación de luchadores y luchadoras, anónimas, insobornables, que lo dieron todo por conquistar el mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones.

Llenazo en el Espacio Rosa Luxemburgo

Hoy como ayer: ¡no pasarán!



Este 20 de noviembre se cumplían cinco décadas de la muerte de Franco. Mientras el Gobierno del PSOE lo celebraba reivindicando “50 años de la España en libertad y la democracia”—una campaña que blanquea y legitima la Transición, y que pretende ocultarnos la resistencia antifascista de aquellos años—alrededor de 200 personas, de las que denunciamos al antidemocrático y podrido régimen del 78, llenamos el sábado 22 el Espacio Rosa Luxemburgo hasta los topes en un gran acto antifascista.

Las caras de los más veteranos, que lucharon contra el franquismo a pie de calle para derrocar ese régimen infame, se mezclaban con muchos jóvenes, una nueva generación que despierta a la política con un profundo sentimiento antifascista, rebelde y odio al capitalismo.

El acto tuvo un cartel excepcional. Pablo Mayoral y Manuel Blanco Chivite, condenados en el consejo de guerra de 1975, abrieron el debate. Nos explicaron cómo fueron los últimos años de la dictadura y los primeros de la Transición. Años de dura represión y donde los derechos democráticos se consiguieron gracias a la movilización en las calles.

Contamos también con Francho Aijón, miembro de la dirección de Podemos y padre de Javitxu, uno de los 6 antifascistas de Zaragoza encarcelados tras un burdo montaje judicial. Coral Latorre, secretaria general del Sindicato de Estudiantes y una de las encausadas de las 7 de Somosaguas, desbarató la campaña interesada que nos presenta la falsa idea de una juventud mayoritariamente influenciada por la extrema derecha. También participó Fonsi Loaiza, escritor y periodista comprometido con la lucha antifascista, que desnudó los vínculos entre el gran capital y el fascismo. Finalmente Juan Ignacio Ramos, secretario general de Izquierda Revolucionaria, abordó el carácter de la extrema derecha hoy, sus similitudes con los años 30 y la demagogia que utiliza para mostrarse como una alternativa. La tarea: levantar un gran frente antifascista para luchar contra esta amenaza que surge de las entrañas podridas del capitalismo.

Crónica completa en izquierdarevolucionaria.net
y, si te lo perdiste, puedes verlo en nuestro canal de YouTube



La derecha judicial condena al fiscal general

EL APARATO ESTATAL FRANQUISTA VIVO YA A LA OFENSIVA



Víctor Taibo
Comisión Ejecutiva
Izquierda Revolucionaria

El día elegido lo dice todo. El 20 de noviembre, 50 años después de la muerte de Franco, el Tribunal Supremo (TS) hizo público un fallo histórico: condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación y a pagar al delincuente confeso Alberto González Amador, pareja de Ayuso, diez mil euros. Que el aparato del Estado, su justicia, su policía y su ejército están dominados por una casta franquista que actúa con absoluta impunidad siguiendo las instrucciones de Vox y del PP ahora parece incuestionable.

Ya lo señaló Aznar. "Quien pueda que haga". Y vaya si están haciendo. Desde muchos sectores de la izquierda gubernamental se habla de golpismo

judicial. Y esta injerencia del TS, convertido en ariete de Ayuso y Feijóo para forzar la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria electoral, tiene mucho de golpe. Pero este comportamiento, que ha llegado con esta sentencia a un punto crítico, viene de muy atrás.

Que la magistratura es un nido de reaccionarios, que el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional fueron el refugio de los jueces del Tribunal de Orden Público, que la justicia de clase franquista sigue viva y coleando al abrigo de los Pactos de la Transición es algo imposible de ocultar.

Lo sabe perfectamente el PSOE, el partido clave del régimen del 78, que cedió este poder omnímodo a la derecha en aras de la estabilidad y la gobernabilidad. Lo sabía al utilizar este aparato para activar la guerra sucia de los GAL, cuando no hizo ascos a aprobar una legislación de excepción antidemocrática, a mantener la infame Ley Mordaza, encarcelar activistas de la izquierda combativa y perseguir organizaciones como Podemos. Nunca alzaron la voz. Ahora recogen los lodos de aquellos polvos.

Pese a la gravedad de lo ocurrido, la posición oficial del Gobierno, a través de su portavoz Félix Bolaños, es que tienen "el deber legal de respetar el fallo" y que "la disreplicencia con esta sentencia no puede conllevar una desconfianza generalizada en las instituciones y, particularmente, en la justicia". Es decir, que aunque estamos ante un hecho "muy

grave" y un "golpe blando", en la práctica, se acepta y se sigue allanando el terreno a la reacción.

¿Por qué el Gobierno y el PSOE siguen defendiendo la independencia de una justicia franquista que actúa como un grupo de choque de la extrema derecha? Questionar este axioma significaría enviar un obús a la legitimidad del régimen, a instituciones que el PSOE siempre ha blanqueado. Significaría entrar en el terreno de la ruptura con el sistema. Y eso, obviamente, no parece que lo vayan a hacer. Mejor seguir simulando y no tomar medidas efectivas para derrotar a la reacción.

Esta sentencia no es una excepción. La historia judicial está llena de decisiones de este sesgo: han tapado la corrupción del PP, han dejado en la calle a Bárcenas, Granados, Esperanza Aguirre, Camps, a ministros del Interior que han creado policías patriotas o han golpeado los derechos democráticos encarcelando a dirigentes de EH Bildu como Otegi, a los líderes independentistas de Catalunya, han procesado y condenado a Pablo Hasél y otros artistas por ejercer la libertad de expresión, a los seis antifascistas de Zaragoza, a las seis sindicalistas de La Suiza...

PASA A LA PÁGINA 6 ▶

